CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 132/2025

ACTOR: FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE MORELOS

SUBSECRETARÍA GENERAL DE ACUERDOS

SECCIÓN DE TRÁMITE DE CONTROVERSIAS CONSTITUCIONALES Y DE ACCIONES DE INCONSTITUCIONALIDAD

En la Ciudad de México, a dos de julio de dos mil veinticinco, se da cuenta a la **Ministra Lenia Batres Guadarrama**, instructora en el presente asunto, con lo siguiente:

Constancias	Registro
Escrito y anexos de Roberto Machado Oaxaca, quien se ostenta como Coordinador General Jurídico y representante legal de la Fiscalía General del estado de Morelos.	1853-SEPJF

Documentales recibidas en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de este alto tribunal. Conste.

Ciudad de México, a dos de julio de dos mil veinticinco.

I. Ampliación de demanda. Agréguese al expediente para que surtan efectos legales, el escrito y anexos del Coordinador General Jurídico y representante legal de la Fiscalía General del estado de Morelos, a quien se tiene por presentado con la personalidad que ostenta¹, realizando ampliación de demanda en la controversia constitucional en la que se actúa.

¹ De conformidad con las documentales que exhibe para tal efecto, así como en atención a lo dispuesto en los artículos 21 y 22, fracción XXI, 23 y 24 de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Morelos; 79, párrafo primero, y 81, fracciones I y XIV, del Reglamento de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Morelos; así como el punto único, párrafo primero, del Acuerdo 08/2018 DEL FISCAL GENERAL DEL ESTADO DE MORELOS POR EL QUE SE DESIGNA AL TITULAR DE LA COORDINACIÓN GENERAL JURÍDICA PARA REPRESENTAR, E INTERVENIR EN LOS ASUNTOS JURÍDICOS EN QUE SEA PARTE EL FISCAL GENERAL, LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS, ASÍ COMO LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LA FISCALÍA GENERAL, Y SE DELEGAN FACULTADES PARA SUSCRIBIR CONVENIOS A NOMBRE DE LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO ANTE AUTORIDADES JURISDICCIONALES, ADMINISTRATIVAS Y DEL TRABAJO; mismos que establecen lo siguiente:

Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Morelos

Artículo 21. La Fiscalía General está a cargo de un Fiscal General, quien es el Jefe de la Institución del Ministerio Público, y ejerce la autoridad jerárquica sobre todo el personal de la misma.

(...)

Artículo 22. El Fiscal General tendrá las siguientes atribuciones:

(...)

XXI. Representar legalmente a la Fiscalía General ante todo tipo de autoridades Federales, Estatales y Municipales;

(...)

Artículo 23. El Fiscal General podrá ser representado ante las autoridades judiciales, administrativas, del trabajo o ante particulares, por el personal que para tal efecto designe.

Artículo 24. El Fiscal General, para la mejor organización y funcionamiento de la Fiscalía General, podrá delegar el ejercicio de las atribuciones a que se refiere el artículo 22 de esta Ley, con excepción de las siguientes:

I. Aquellas que le estén reservadas constitucionalmente, y

II. Las señaladas en las fracciones III, IV, VI y VIII, del artículo 22 y los artículos 25 y 28 de esta Ley.

Reglamento de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Morelos

Artículo 79. La Coordinación General Jurídica es la Unidad Administrativa de la Fiscalía General que tiene a su cargo la representación jurídica de la Fiscalía General y de su titular, en los procesos jurisdiccionales de los cuales la institución sea parte, distintos a los que resultan competencia de la FIDAI, las Fiscalías Regionales y Especializadas, y aquellas relativas a las funciones propias de los Agentes del Ministerio Público; pudiendo constituirse en su asesor jurídico en todos los actos en que aquellas sean parte. También le corresponde revisar, adecuar y rubricar todos los reglamentos, acuerdos, lineamientos, protocolos y demás instrumentos normativos de carácter general que elaboren las unidades administrativas para el mejor desempeño de sus atribuciones y deban ser suscritos y expédidos por el Fiscal General.

(...)

Artículo 81. La persona Titular de la Coordinación General Jurídica, además de las atribuciones genéricas establecidas en el artículo 24 bis, tiene las siguientes específicas:

I. Representar e intervenir en los asuntos jurídicos en que sea parte la Fiscalía General como organismo constitucional autónomo y su titular, así como las unidades administrativas y las personas servidoras públicas que la integran; ejerciendo todas las facultades que le confiere la normativa aplicable, inclusive lo relativo al juicio en línea o demás mecanismos electrónicos que aquella prevea;

(...)

XIV. Representar a la Fiscalía General y su titular, en las controversias a que se refiere la fracción I del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ejerciendo todas las atribuciones que la normativa en la materia le conceda para su atención y defensa, y

(...)

ACUERDO 08/2018 DEL FISCAL GENERAL DEL ESTADO DE MORELOS POR EL QUE SE DESIGNA AL TITULAR DE LA COORDINACIÓN GENERAL JURÍDICA PARA REPRESENTAR, E INTERVENIR EN LOS ASUNTOS JURÍDICOS EN QUE SEA

CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 132/2025

Al respecto, debe precisarse que en su escrito inicial de demanda la Fiscalía General del estado de Morelos, promovió controversia constitucional en contra de los poderes Legislativo y Ejecutivo de la referida entidad federativa, en la que impugnó lo siguiente:

“IV. ACTO, NORMA U OMISIÓN CUYA INVALIDEZ SE DEMANDA:

1. Del Poder Legislativo del Estado de Morelos se reclama:

1.1 La aprobación y expedición del decreto número veinticinco (25), publicado el 31 de diciembre de 2024, en el Periódico Oficial ‘Tierra y Libertad’, número 6382, por el que se aprueba el Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Morelos para el ejercicio fiscal del 1 de enero al 31 de diciembre del 2025. En específico, los artículos Primero, penúltimo párrafo, Décimo sexto, cuarto y quinto párrafos, Vigésimo noveno, séptimo párrafo, disposición transitoria Quinta y el anexo 38 contenido en la **segunda sección** de la referida publicación **6382** del Periódico Oficial.

2. Del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos se reclama:

2.1 La sanción, promulgación y publicación del decreto número veinticinco (25), publicado el 31 de diciembre de 2024, en el Periódico Oficial ‘Tierra y Libertad’, número 6382, por conducto de los servidores públicos con facultades para el efecto, esto es, el Gobernador del Estado (sanción y promulgación) y el Secretario de Gobierno (publicación). En específico, los artículos Primero, penúltimo párrafo, Décimo sexto, cuarto y quinto párrafos, Vigésimo noveno, séptimo párrafo, disposición transitoria Quinta y el anexo 38 contenido en la segunda sección de la referida publicación 6382 del Periódico Oficial.

3. Los efectos y consecuencias que de dicho acto se deriven en agravio de este organismo constitucional autónomo, violentando el principio de división de poderes y el orden constitucional establecido.”.

Por su parte, con el escrito y anexos de cuenta, el accionante pretende ampliar su demanda con motivo de un hecho superveniente atribuible a los poderes Legislativo y Ejecutivo del estado de Morelos, el que hace consistir en lo siguiente:

“IV. ACTO, NORMA U OMISIÓN CUYA INVALIDEZ SE DEMANDA:

1. Del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos se reclama:

1.1 En su calidad de responsable directo de la administración y la hacienda pública Estatal, por conducto de su Secretaría de Hacienda, la inconstitucional injustificada y sistemática privación de recursos públicos producida por la negativa a acceder a recursos extraordinarios a fin de poder iniciar con la operatividad de la Fiscalía Especializada en la Investigación y Persecución de Delitos de Tortura, materializada a través del oficio número PF/E/V/1368/2025, signado por Brandon Parra Espinoza, Subprocurador Fiscal de Asuntos Estatales de la Secretaría de Hacienda del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos.

2. Del Poder Legislativo del Estado de Morelos se reclama:

2.1 En su calidad de responsable directo del control, revisión y aprobación del presupuesto otorgado a todas las entidades públicas del Estado de Morelos, la inconstitucional injustificada y sistemática privación de recursos públicos causada por la omisión de destinar una partida presupuestal específica para la operatividad de la Fiscalía Especializada en la Investigación y Persecución de Delitos de Tortura materializada mediante oficios LVI/SSLyP/DJ/05170/2025 y LVI/SSLyP/DJ/05171/2025, signados por Jazmín Juana Solano López, Presidenta

PARTE, EL FISCAL GENERAL, LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS, ASÍ COMO LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LA FISCALÍA GENERAL, Y SE DELEGAN FACULTADES PARA SUSCRIBIR CONVENIOS A NOMBRE DE LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO ANTE AUTORIDADES JURISDICCIONALES, ADMINISTRATIVAS Y DEL TRABAJO.

ÚNICO. Se designa al Titular de la Coordinación General Jurídica para representar e intervenir en los asuntos jurídicos en que sea parte el Fiscal General, las Unidades Administrativas, así como los servidores públicos de la Fiscalía General, presentar las demandas, denuncias, querrelas y representar jurídicamente al Fiscal General ante las autoridades judiciales y administrativas, del trabajo o ante particulares en aquellos asuntos en que sea parte o tenga interés jurídico; contestar las demandas que se formulen en contra del Fiscal General, así como reconvenir en aquellos asuntos que así debiere hacerlo; así como los relacionados con la terminación de las relaciones administrativas y del trabajo y se delega el ejercicio de las atribuciones para suscribir los convenios a que se refiere el artículo 22, fracción XVII, de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Morelos, ante las autoridades jurisdiccionales, administrativas y del trabajo.

(...).

de la mesa directiva de la LVI Legislatura del Congreso del Estado de Morelos y por Andrea Valentina Guadalupe Gordillo Vega, Presidenta de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública del Congreso del Estado de Morelos, respectivamente.

3. Los efectos y consecuencias que de dicho acto se deriven en agravio de este organismo constitucional autónomo, violentando el principio de división de poderes y el orden constitucional establecido”.

Establecido lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 27 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la ampliación de la demanda en las controversias constitucionales debe tramitarse atendiendo a los mismos criterios y disposiciones que rigen la demanda original.

En ese sentido, conforme al citado precepto la ampliación constituye un derecho procesal del que puede hacer uso la parte actora con motivo de un hecho nuevo o superveniente, siempre y cuando lo lleve a cabo dentro de los plazos establecidos para cada caso.

Por tanto, cuando al contestarse la demanda aparezca un hecho nuevo, la ampliación deberá presentarse dentro de los quince días siguientes; mientras que, tratándose de hechos supervenientes, acaecidos con posterioridad a la presentación del escrito inicial y hasta antes del cierre de instrucción, tendrá que promoverse dentro de los plazos que rigen para la presentación de la demanda inicial, en términos del artículo 21, fracciones I y II, de la Ley Reglamentaria de la materia.

Lo anterior, tiene sustento en las jurisprudencias **P./J. 139/2000** y **P./J. 55/2002**, de rubros y textos siguientes:

“CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. HECHO NUEVO Y HECHO SUPERVENIENTE PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DE LA AMPLIACIÓN DE LA DEMANDA. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 27 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Federal, la ampliación de la demanda de controversia constitucional constituye un derecho procesal, del cual la parte actora puede hacer uso cuando se actualice cualquiera de las siguientes dos hipótesis, a saber: la primera, dentro del plazo de quince días siguientes a la presentación de la contestación de la demanda, si en ésta apareciere un hecho nuevo; y, la segunda, hasta antes de la fecha del cierre de la instrucción si apareciere un hecho superveniente. Ahora bien, para determinar la oportunidad en que debe hacerse valer la referida ampliación, debe tomarse en consideración la distinción entre el hecho nuevo y el superveniente, pues mientras el primero es aquel respecto del cual la parte actora tiene conocimiento de su existencia con motivo de la contestación de la demanda, con independencia del momento en que nace, el hecho superveniente es aquel que se genera o acontece con posterioridad a la presentación de la demanda de controversia constitucional, pero antes del cierre de instrucción. De ahí que tratándose de hechos nuevos deba determinarse cuándo tuvo conocimiento de ellos la parte actora, en tanto que si se trata de hechos supervenientes deba definirse cuándo tuvieron lugar”.

“CONTROVERSIA CONSTITUCIONALES. LA AMPLIACIÓN DE LA DEMANDA CON MOTIVO DE UN HECHO SUPERVENIENTE, DEBE PROMOVERSE DENTRO DE LOS PLAZOS QUE ESTABLECE EL ARTÍCULO 21 DE LA LEY REGLAMENTARIA DE LAS FRACCIONES I Y II DEL ARTÍCULO 105 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. **“CONTROVERSIA CONSTITUCIONALES. LA AMPLIACIÓN DE LA DEMANDA CON MOTIVO DE UN HECHO SUPERVENIENTE, DEBE PROMOVERSE DENTRO DE LOS PLAZOS QUE ESTABLECE EL ARTÍCULO 21 DE LA LEY REGLAMENTARIA DE LAS FRACCIONES I Y II DEL ARTÍCULO 105 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.** De la interpretación sistemática del artículo 21 de la citada ley, que establece los plazos para la presentación de la demanda de controversia constitucional, así como del diverso artículo 27 del propio ordenamiento, que prevé que el actor podrá ampliar su demanda ‘hasta antes de la fecha de cierre de la instrucción si apareciere un

CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 132/2025

hecho superveniente', se concluye que aun cuando el último precepto señalado no prevé expresamente el plazo para promover la ampliación cuando se trata de un hecho superveniente, sino que únicamente condiciona la promoción a que no se hubiera cerrado la instrucción, aquella debe efectuarse dentro de los plazos que rigen la presentación de la demanda inicial, ya que sostener lo contrario generaría una incongruencia procesal, toda vez que si para la promoción de la acción de controversia el actor debe hacerlo dentro de los plazos que señala el citado numeral 21, para la ampliación de la misma demanda el plazo sería indeterminado, cuando no existe razón jurídica para tal diferencia si se parte del momento en que el actor tenga conocimiento del hecho superveniente. Además, la finalidad de la ampliación de demanda consiste en que, por economía procesal, se tramite y resuelva en un solo juicio lo que está íntimamente vinculado con el primer acto o la norma general impugnada, siempre y cuando no se hubiera cerrado la instrucción, a fin de evitar que se presenten demandas nuevas cuando se trata de actos estrechamente vinculados, por lo que si una demanda nueva debe presentarse dentro de los plazos que prevé la ley citada, iguales plazos deben regir cuando se trata de su ampliación con motivo de un hecho superveniente."

Ahora bien, en el presente caso, de la lectura integral del escrito de ampliación de demanda y anexos remitidos, se advierte que el actor impugna como **hecho superveniente**, los oficios PF/E/V/1368/2025, LVI/SSLyP/DJ/05170/2025 y LVI/SSLyP/DJ/05171/2025, por los cuales, respectivamente, los poderes Ejecutivo y Legislativo del estado de Morelos, en esencia, negaron la ampliación presupuestal solicitada por la Fiscalía General de la entidad, para la operatividad de la Fiscalía Especializada en la Investigación y Persecución de Delitos de Tortura, lo que se encuentra estrechamente relacionado con el decreto número veinticinco (25), publicado el 31 de diciembre de 2024, en el Periódico Oficial 'Tierra y Libertad', número 6382, por el que se aprueba el Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Morelos para el ejercicio fiscal del 1 de enero al 31 de diciembre del 2025, el que se encuentra controvertido en este medio de control constitucional.

II. Admisión a la ampliación de demanda. En ese orden de ideas, considerando que el escrito de ampliación fue presentado con posterioridad a la admisión de la demanda original y de manera previa a la fecha de cierre de instrucción de la presente controversia constitucional, es decir, antes de la celebración de la audiencia de ofrecimiento y desahogo de pruebas y alegatos y conforme al plazo establecido en el artículo 21, fracción I, de la Ley Reglamentaria de la materia, sumado a que la materia de impugnación guarda estrecha relación con el decreto por el que se aprueba el Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Morelos para el ejercicio fiscal del 1 de enero al 31 de diciembre del 2025 controvertido en este medio de control constitucional; con fundamento en el artículo 105, fracción I, inciso k) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los numerales 11, párrafo primero y 27 de la Ley Reglamentaria de materia, se **admite a trámite la ampliación de demanda que hace valer el accionante**², sin perjuicio de los motivos de improcedencia que puedan advertirse de manera fehaciente al momento de dictar sentencia.

III. Pruebas. Con fundamento en los artículos 31 y 32, párrafo primero, de la Ley Reglamentaria de la materia, se tiene al accionante ofreciendo como pruebas las documentales que acompaña a su escrito, así como la instrumental de actuaciones y la presuncional en su doble aspecto, legal y humana, las que se relacionarán en la audiencia de ofrecimiento y desahogo de pruebas y alegatos.

² En el presente caso, los oficios impugnados fueron notificados al actor el ocho de abril de dos mil veinticinco, por lo que el plazo de treinta días a que se refiere el artículo 21, fracción I, de la Ley Reglamentaria de la materia, transcurrió del nueve de abril al veintiocho de mayo de dos mil veinticinco. Por tanto, si la ampliación de demanda fue enviada a la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de este alto tribunal, a través del sistema electrónico el veintidós de mayo del presente año, es inconcuso que su presentación es oportuna.

IV. Autoridades demandadas y emplazamiento. Con fundamento en los artículos 10, fracción II, y 26, párrafo primero, de la invocada normativa reglamentaria, se tiene como demandados derivado de la ampliación de demanda a los **poderes Legislativo y Ejecutivo del estado de Morelos** a quienes se ordena emplazar con copia simple de la copia simple del escrito de ampliación y anexos, para que presenten su contestación a la ampliación de demanda dentro del plazo de **treinta días hábiles**, contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente acuerdo.

V. Requerimiento. Por otra parte, a fin de integrar debidamente el expediente, observando el artículo 35 de la citada Ley Reglamentaria y la tesis de rubro: **“CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. EL MINISTRO INSTRUCTOR TIENE FACULTADES PARA DECRETAR PRUEBAS PARA MEJOR PROVEER”**, se requiere a los **poderes Legislativo y Ejecutivo del estado de Morelos**, para que al dar contestación a la ampliación de demanda, envíen a este Alto Tribunal copia certificada de todas las documentales relacionadas con los actos impugnados.

Lo anterior deberá remitirse **únicamente** de manera digital, a través de algún **soporte de almacenamiento de datos que resulte apto para reproducir los archivos multimedia que contenga**; precisando que dicho medio electrónico deberá contar con su respectiva certificación que acredite el contenido de los documentos.

Se apercibe a las mencionadas autoridades locales que, de no cumplir con el requerimiento efectuado, se le aplicará una multa, en términos del artículo 59, fracción I, del invocado Código Federal.

VI. Traslado. De conformidad con lo establecido en el artículo 10, fracción IV, de la Ley Reglamentaria de la materia,³ y con lo determinado por el Tribunal Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, en su sesión privada de once de marzo de dos mil diecinueve, con copia simple de este auto, así como del escrito de ampliación de demanda y anexos, córrase traslado a la Fiscalía General de la República y a la Consejería Jurídica del Gobierno Federal.

Notifíquese, por lista a la autoridad accionante; en sus residencias oficiales a los poderes Legislativo y Ejecutivo del estado de Morelos; por oficio a la Consejería Jurídica del Gobierno Federal; y vía electrónica a la Fiscalía General de la República.

En ese orden de ideas, remítase la versión digitalizada del presente acuerdo, así como del escrito de ampliación de demanda y anexos, a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en la ciudad de Cuernavaca, por conducto del **MINTERSCJN**, regulado en el Acuerdo General Plenario **12/2014**, a fin de que genere la boleta de turno que le corresponda y la envíe al órgano jurisdiccional en turno, a efecto de que, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 137 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación,⁴ 4, párrafo primero, y 5 de la

³ Comunicado a esta Sección de Trámite mediante oficio número SGA/MFEN/237/2019, de once de marzo de dos mil diecinueve, suscrito por el Secretario General de Acuerdos, en los términos siguientes: *“Hago de su conocimiento que en sesión privada celebrada el día de hoy, el Tribunal Pleno determinó ‘Dar vista en los asuntos relativos a las controversias constitucionales, acciones de inconstitucionalidad, en los recursos deducidos de esos expedientes, además de los juicios sobre cumplimiento de los convenios de coordinación fiscal, tanto a la Fiscalía General de la República como al Consejero Jurídico del Gobierno Federal.’”*

⁴ Disposiciones normativas que resultan aplicables de conformidad con el **tercero transitorio** de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación publicada en el Diario Oficial de la Federación el veinte de diciembre de dos mil veinticuatro, el cual dispone:

CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 132/2025

Ley Reglamentaria de la materia, lleve a cabo la diligencia de notificación por oficio a los poderes Legislativo y Ejecutivo del estado de Morelos, en sus residencias oficiales, respectivamente, de lo ya indicado.

Lo anterior, en la inteligencia de que para los efectos de lo previsto en los artículos 298 y 299 del citado Código Federal de Procedimientos Civiles, la copia digitalizada de este proveído, en la que conste la evidencia criptográfica de la firma electrónica del servidor público responsable de su remisión por el **MINTERSCJN**, hace las veces del despacho número **461/2025**, por lo que se requiere al órgano jurisdiccional respectivo, a fin de que en auxilio de las labores de este alto tribunal, a la brevedad posible, lo devuelva debidamente diligenciado por esa misma vía, **adjuntando las constancias de notificación y las razones actuariales respectivas en las que conste la entrega de la documentación remitida por este alto tribunal.**

Por lo que hace a la notificación del citado órgano constitucional autónomo, remítasele la versión digitalizada del presente acuerdo, así como del escrito de ampliación de demanda, por conducto del **MINTERSCJN**. Dicha notificación se tendrá por realizada al día siguiente a la fecha en la que se haya generado el acuse de envío en el sistema electrónico de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Cúmplase.

Lo proveyó y firma la **Ministra instructora Lenia Batres Guadarrama**, quien actúa con el Licenciado **Eduardo Aranda Martínez**, Secretario de la Sección de Trámite de Controversias Constitucionales y de Acciones de Inconstitucionalidad de la Subsecretaría General de Acuerdos de este alto tribunal, que da fe.

Esta hoja corresponde al proveído de dos de julio de dos mil veinticinco, dictado por la **Ministra instructora Lenia Batres Guadarrama**, en la controversia constitucional **132/2025**, promovida por la Fiscalía General del estado de Morelos. Conste.

DAHM/JEOM 03

"Tercero.- Hasta en tanto las Ministras y Ministros electos tomen protesta de su encargo ante el Senado de la República el 1o. de septiembre de 2025, la Suprema Corte de Justicia de la Nación se regirá para todos los efectos por las atribuciones, competencias, obligaciones, reglas de votación, faltas, licencias y demás disposiciones contenidas en la Ley Orgánica del Poder Judicial la Federación, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 7 de junio de 2021; con excepción de la materia electoral tal como está previsto en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. En consecuencia, hasta la fecha señalada en el enunciado anterior, la Suprema Corte de Justicia de la Nación seguirá funcionando en Pleno o en Salas".